

Jefa comunal de Lo Espejo

Tras caso de Javiera Reyes, proponen tipificar como delito las amenazas a alcaldes

Varios alcaldes cuentan desde hace tiempo con escolta de carabineros. El MP conoce quiénes han recibido amedrentamientos, pero también existe una cifra negra pues no todos denuncian.

Pablo Basadre G.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, lleva años amenazada por bandas de narcotraficantes de su comuna. También le ocurrió al exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Y lo más reciente fue el precio de \$100 millones que distintas bandas de Lo Espejo le pusieron a la cabeza de la alcaldesa Javiera Reyes.

El Ministerio Público, en causas que están radicadas en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, es el encargado de solicitar medidas de seguridad cuando ingresan denuncias, como lo hizo Reyes el 30 de enero pasado, luego que vecinos de la comuna le entregaran información respecto de una conversación entre dos personas donde se daba cuenta del plan para asesinarla.

Aunque en Chile el fenómeno sigue siendo relativamente nuevo, en países como Colombia se han vivido tragedias. Solo en 2024, decenas de alcaldes dimitieron luego de presiones de grupos narcos y de la guerrilla de las FARC. En el caso de ellos, el gobierno conformó un grupo para tomar medidas, como que las autoridades pudieran realizar parte de su trabajo en comandos militares.

Las alcaldesas y alcaldes que han hecho denuncias ante el Ministerio Público han recibido resguardo policial, lo que implica contar con personal de Carabineros que los escoltan en todas sus actividades. Si bien, no se trata de un resguardo las 24 horas del día, los ediles no están solos cuando realizan su trabajo.

No todas las amenazas tienen que ver con bandas dedicadas a la venta de estupefacientes; también los alcaldes reciben presiones indebidas y cartas con intimidaciones.

Le ha ocurrido al alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, y a su colega de



San Bernardo, Christopher White, por la eterna erradicación del comercio ambulante, donde operan bandas de crimen organizado. White, por ejemplo, recibió un manuscrito donde le decían: "White te vamos a matar y a tu familia también".

También los alcaldes han sido amedrentados por la destrucción de animitas que "homenajean" a un delincuente ajusticiado en las calles.

La alcaldesa de La Pintana ha contado en varias entrevistas que su vida, desde que la amenazaron y cuenta con seguridad policial, ya no es la misma. Debe analizar bien cada vez que realiza alguna actividad no solo de trabajo, sino que también en el plano social.

Lo mismo le ha ocurrido a Gustavo Toro en San Ramón. En su caso, ha sufrido amedrentamientos desde que era concejal de la comuna.

Frente a la denuncia de Javiera Reyes, publicada en La Segunda, el alcalde Felipe Muñoz dice que "en democracia, las diferencias se enfrentan con diálogo y nunca con violencia o intimidación. Amenazar a una autoridad electa no solo es



Esto se debe investigar con la máxima celeridad, y garantizar la seguridad de la alcaldesa para que pueda ejercer su cargo con plena tranquilidad".

Felipe Muñoz, alcalde de Estación Central

atentar contra la persona, sino que también contra la institucionalidad y la comunidad que ella representa. Esto se debe investigar con la máxima celeridad, y garantizar la seguridad de la alcaldesa para que pueda ejercer su cargo con plena tranquilidad".

Cabe señalar que la alcaldesa de Lo Espejo cuenta con protección policial de Carabineros desde 2025.

Pizarro: "El precio que se paga por defender a los vecinos"

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) condenó las amenazas de muerte en contra la alcaldesa de Lo Espejo. Su presidente, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, dijo a este diario que "no es aceptable que gobernar un territorio signifique arriesgar la vida. Los municipios de Chile seguiremos enfrentando con valentía y determinación al crimen organizado en nuestros territorios, con el respaldo del Estado y la protección que las autoridades locales merecen", afirma Alessandri.

Desde la ACHM explican que se ha activado un protocolo de "solidaridad institucional".

"Hacemos un llamado a todas las instituciones del Estado —Ministerio Público, policías, Gobierno— a actuar con la máxima urgencia y contundencia frente a esta

amenaza que nos interpela a todos", agrega Alessandri.

Claudia Pizarro dice que "los alcaldes son la primera línea del Estado para muchas personas y ser amenazado de muerte no debería ser el precio que se paga por defender y trabajar por los vecinos. Solidarizamos con la alcaldesa Javiera Reyes y exigimos que las instituciones y autoridades competentes actúen con la mayor celeridad y el máximo rigor para detener a los responsables".

Andrés Chacón, director ejecutivo de la Asociación de municipalidades de Chile (AMUCH), asegura que existe una cifra negra sobre ediles que han recibido intimidaciones porque "no todos los casos se hacen públicos, no todos denuncian".

Y agrega: "Es fundamental denunciar. El avance del crimen organizado en Chile ha alcanzado niveles críticos, y no podemos normalizar ni permitir amenazas contra autoridades en ejercicio, porque cuando se intimida a quienes han sido democráticamente electos, se pone en riesgo la democracia misma".

Chacón anuncia que enviarán una propuesta al gobierno "para tipificar como delito las amenazas contra alcaldes y concejales. Creemos que esta protección debe ir en la misma línea de la legislación que resguarda a los fiscales en Chile".